

# Inermes ante las turbas

24 de diciembre de 2020

## **CONTROVERSIAS**

**Fernando Rospigliosi**

Para **Lampadia**

Los bloqueos y la violencia en la carretera Panamericana en Ica y La Libertad tienen directa relación con los disturbios promovidos por las izquierdas y sus aliados en Lima a mediados de noviembre, que culminaron con la caída del efímero Gobierno de Manuel Merino. El casi unánime apoyo de los medios de comunicación que antes habían respaldado a Martín Vizcarra y luego la legitimación de las protestas violentas por parte del Gobierno de Francisco Sagasti –que rindió especial homenaje a los dos jóvenes delincuentes que lamentablemente fallecieron en esos eventos en su discurso de toma de posesión en el Congreso-, contribuyeron a justificar el uso de la violencia para obtener lo que se quiere.

**Ni que decir del apoyo de ciertos líderes empresariales que, con absoluta miopía, intentaron quedar bien con la muchedumbre.**



De esa manera se abrieron las compuertas para los desórdenes y la violencia. Naturalmente, el Gobierno de Sagasti es incapaz de enfrentar con firmeza y decisión las asonadas. Teme perder el respaldo de los que los llevaron al poder.

Así, la Policía Nacional ha sido enviada a los bloqueos con órdenes de no lastimar a los manifestantes, que han atacado con ferocidad y salvajismo, premunidos con hondas, piedras, bombas molotov y toda clase de artefactos contundentes a las fuerzas del orden.

Ese comportamiento, como es obvio, solo enardece y alienta a los violentistas a seguir cometiendo desmanes.

No solo eso, el ex candidato del Partido Morado y ex secretario del presidente Sagasti, hoy ministro del Interior, ha sostenido públicamente que hay que cambiar la ley de protección policial (N° 31012) y ha tratado con guantes de seda a los bárbaros que secuestraron y golpearon policías en los recientes disturbios (Canal N, 22/12/20).

Las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran que las protestas sociales crecieron exorbitantemente en noviembre a 395 (en octubre 138 y en setiembre 117), aunque estas cifras solo muestran la cantidad, pero no la calidad, es decir, el nivel de violencia descontrolada de las últimas semanas. (“Gestión”, 17/12/20).

Los bloqueos en Ica y la Libertad amenazan con liquidar uno de los más importantes motores de la economía de las últimas dos décadas, la moderna agricultura de exportación que ha llevado empleo y prosperidad a cientos de miles de trabajadores y sus familias. Y se suma a los asaltos a otro de los propulsores de la economía, la minería, bajo asedio desde hace tiempo. El bloqueo de dos semanas a la mina Las Bambas es solo una muestra de ello.

Si se le agrega que el oleoducto Nor Peruano lleva más de 80 días inactivo por sucesivos ataques (ver las [observaciones y conclusiones de Ismael Benavides](#) en **Lampadia**, 23/12/20), se puede constatar que varias de las actividades económicas decisivas para el crecimiento del país están bajo ataque.

**Nada indica que esto vaya a cambiar con el actual Gobierno. Pero es fundamental impedir que esta situación se prolongue durante cinco años más.**

- Las protestas sociales deben ser enfrentadas primero políticamente, es decir, negociando, convenciendo persuadiendo.
- Segundo, cuando se producen hechos de violencia, las fuerzas del orden deben enfrentar los disturbios con toda firmeza, conducidas y respaldadas por un Gobierno decidido.
- Y en tercer lugar, algo que ni siquiera se esboza ahora, aplicando la ley con vigor.

Si diez, quince o veinte violentistas fueran detenidos, procesados y sentenciados por el delito de bloqueo de carreteras (de 5 a 10 años de prisión, artículo 200° del Código Penal) o por atacar a las fuerzas del orden (de 8 a 12 años de prisión, arts. 366° y 367° del CP), la disuasión sería efectiva.

**Lampadia**